

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL**

Medellín, veintisiete (27) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Exp. 019-2021-00390-01

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala Quinta de Decisión Laboral, a resolver los recursos de apelación interpuestos por MORELCO S.A.S. y CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., frente al auto que decidió declarar impróspera la excepción previa de “FALTA DE RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA” y “FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL” dentro del proceso ordinario laboral que adelanta en su contra y de ECOPETROL S.A. y CONFIANZA S.A. el señor JESÚS EMILIO HENAO PARDO.

**ANTECEDENTES:**

El demandante radicó el escrito inicial con el propósito que se declare la existencia de un contrato de trabajo surgido con Morelco S.A.S., con solidaridad de parte de Ecopetrol S.A. y CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., cuyos extremos temporales van del 28 de enero de 2008 al 31 de enero de 2019, se surta un análisis sobre la aplicación de la convención colectiva a los trabajadores de la sociedad Morelco S.A.S. como contratista y se disponga la condena de la indemnización por despido sin justa causa, el trabajo suplementario no reconocido, los viáticos y su reajuste, el ajuste de los aportes al Sistema de la Seguridad Social acorde al salario realmente devengado, el pago del cálculo actuarial por los tiempos con inexistencia de afiliación, las cesantías o su reliquidación, así

como la de los intereses a la cesantía, las vacaciones y los salarios cuando desempeñó distintos cargos y cuando hubo supuestos períodos de interrupción en el mismo, el reajuste de las prestaciones extralegales derivadas de la convención colectiva, la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, la indexación y las costas del proceso.

Una vez notificada en debida forma la pasiva, hubo oposición a las pretensiones con formulación de las excepciones previas de falta de competencia por falta de reclamación administrativa y falta de competencia funcional por parte de Cenit S.A.S. (Págs.23-26 Archivo 09), la de falta de competencia y nulidad - Ausencia de reclamación administrativa previa por cuenta de Ecopetrol S.A. (Págs. 12-14 Archivo 12), y de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones propuesta por Morelco S.A.S. (Pág. 82 Archivo 14).

Surtido el trámite que conlleva a la diligencia que contempla el artículo 77 del CPTSS, se dio trámite en la etapa pertinente a los aludidos medios exceptivos que el Juez de Instancia declaró no probados, argumentando que no se está en frente de una inepta demanda, porque en el marco de la dirección del proceso y las facultades y deberes que atañen al Juez, es dable interpretar a partir de los fundamentos fácticos expuestos, lo que realmente se busca al promover el actor este litigio. Sobre la falta de competencia funcional señaló que al ser la relación civil dada entre las sociedades demandadas que se puso de presente la base a partir de la cual se busca el reconocimiento de acreencias laborales, si es dable resolver la cuestión planteada en la demanda por esta jurisdicción, pero determinando de manera exclusiva la responsabilidad de naturaleza laboral que de allí pudiera derivarse. Frente a la ausencia de reclamación administrativa indicó que Ecopetrol tiene un carácter público y Cenit es una S.A.S de economía mixta que recibe capital público por lo que en principio debía agotarse la reclamación respecto a estas empresas, pero a folio 299 del Archivo 02, aparece una respuesta de Ecopetrol ante quien se presentó reclamación, donde traslada el asunto a la firma encargada, lo que da

cuenta de la solicitud que el actor si elevó ante esta sociedad por lo que sin importar la respuesta ofrecida, se satisfizo el requisito que enlista el artículo 6° del CPTSS. En cuanto a Cenit, adujo que si bien no se evidencia que se hubiera presentado solicitud directa de lo que hoy persigue, de la información del expediente se extrae que la reclamación llegó a esa empresa por remisión de Ecopetrol según lo muestra el folio 302 del Archivo 02, por lo que se entiende también surtida esta exigencia ante Cenit, cumpliéndose el fin que es garantizar previo a la acción judicial que la entidad pública conozca lo reclamado y pueda bajo el principio de auto tutela entrar a pronunciarse.

Morelco S.A.S se apartó de la anterior determinación, exponiendo frente a la excepción de inepta demanda que desde su punto de vista el Despacho no tuvo en cuenta el contenido del numeral 6° del artículo 25 del CPTSS, en el que para efectos de los requisitos de la demanda es necesario indicar lo que se pretende con suficiente claridad, y bajo ese escenario, aduce que de las pretensiones no se extrae el tipo de contrato que busca sea declarado, tampoco el término de duración, además que no se determina de manera detallada, precisa e individualizada cada una de las peticiones, no discrimina la declarativas de las de condena y de cara a la defensa de las demandadas, no es posible realizar un pronunciamiento debido por la manera en que se formulan. Aduce tener claro que esta excepción no termina el proceso, pero si exige que las irregularidades sean saneadas al interior del proceso por lo que debe declararse su prosperidad.

Cenit S.A.S por su parte, adujo que disentía de la decisión en cuanto se declararon no probadas las excepciones de falta de competencia funcional y falta de agotamiento de la reclamación administrativa, señalando que en este caso el Juez es incompetente para declarar la existencia de un contrato de naturaleza civil o comercial, y acorde a lo que se lee en la primera pretensión principal lo que se busca es la declaratoria de un contrato de esa naturaleza entre Morelco y Ecopetrol, para lo que debe acudir necesariamente a los presupuestos de eficacia y validez que trae la norma

civil, por lo que sosteniéndose la parte demandante en la aludida pretensión esta excepción previa debe tener prosperidad, por excederse la competencia del juez del trabajo.

Sobre la reclamación administrativa, indicó que debe surtirse por la parte demandante y no por las entidades públicas que están llamadas a juicio, y que si se acude a la solicitud del mes de agosto de 2019, de la misma no se extrae el cumplimiento de los requisitos del artículo 6° del CPTSS, pues allí no se incorporan los derechos que pretenden ser declarados. Plantea además que no hay constancia que muestre que efectivamente la empresa haya recibido la comunicación de parte de Ecopetrol donde se consignara lo perseguido, pues solo se observa un escrito del mes de agosto de 2019 donde se requiere la entrega de documental a la que se dio respuesta el 02 de octubre de ese mismo año, argumentos a partir de los cuales considera que también esta excepción está llamada a prosperar por ser la reclamación un presupuesto procesal para acceder a la jurisdicción laboral.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### **CONSIDERACIONES**

Sea lo primero aclarar que la providencia cuestionada, es susceptible de la alzada conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 65 del CPTSS, según el cual, es apelable el auto que decida sobre excepciones previas, en coherencia con los casos enlistados en los numerales 1° y 5° del artículo 100 del CGP aplicable en este trámite por la remisión integrada en el artículo 145 del CPTSS y el artículo 6° del Código Adjetivo Laboral.

Pues bien, para la resolución de lo propuesto, se tiene en primer lugar que la demanda al momento de su presentación debe cumplir con los requisitos que para este rito contiene el artículo 25 del CPTSS, el que en su numeral

6° expone que el libelo debe contener lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.

La ausencia de tal requisito formal, puede sanearse por el juzgado al momento de dictar el auto de admisión devolviendo la demanda para su subsanación; pero si así no se hizo, es procedente la proposición del medio dilatorio denominado *inepta demanda* (artículo 100 numeral 5 CGP), excepción frente a la que el juzgador debe ser cuidadoso, porque los requisitos formales no pueden privilegiarse soslayando el derecho sustancial. Al respecto, de antaño la jurisprudencia nacional ha sostenido sobre el presupuesto procesal de demanda en forma, que:

*“...el defecto que debe presentar una demanda para que se la pueda calificar de inepta o en indebida forma tiene que ser verdaderamente grave, trascendente y no cualquier informalidad superable lógicamente, pues bien se sabe que una demanda ‘...cuando adolece de cierta vaguedad, es susceptible de ser interpretada por el juzgador, con el fin de no sacrificar un derecho y siempre que la interpretación no varíe los capítulos petitorios del libelo...’; ‘...en la interpretación de una demanda -afirma categóricamente la Corte- existe el poder necesario para ir tras lo racional y evitar lo absurdo’...”* (Sentencia S-040-2002 Rad. 6649 Sala de Casación Civil - Corte Suprema de Justicia).

Al cobijo de los elementos enunciados se descende al *sub lite*, encontrando que la excepción previa de inepta demanda tiene por argumento la ausencia de claridad y técnica en las pretensiones, que dificulta en la pasiva un pronunciamiento acertado para los fines de su defensa; no obstante lo anterior, aun cuando es cierto que lo pedido no incluye el tipo de contrato y duración que se busca sea determinado en este escenario, asiste razón al *A quo* cuando aduce que del contexto pleno del escrito de demanda es posible interpretar el propósito de este trámite, pues debe indicar esta Sala de Decisión, que en efecto, no es dable sacrificar el contenido por las formas debiendo considerarse la demanda como un todo integrado, que aun cuando se debe formular atendiendo a los requerimientos formales que la ley establece de manera enunciativa, es la suma de tales elementos la

que determina la interpretación que el operador jurídico debe darle a los planteamientos de la parte actora sin alterar sus factores esenciales.

Así, la lectura de las pretensiones da cuenta que lo que busca el actor no es cosa distinta que la declaratoria de una única relación de tipo laboral con Morelco S.A.S con el fin de dar cumplimiento al objeto de unos contratos de índole civil o comercial que esta empresa había suscrito con las codemandadas, cuya modalidad penderá de lo demostrado en cuanto a su existencia por estar en contraposición a 26 relaciones de trabajo por obra o labor y duración definida, que bien puede ser concretada a partir de los medios de convicción que se arriben, para en consecuencia, obtener el reconocimiento y pago de manera solidaria de acreencias laborales que están enlistadas de forma detallada en las pretensiones de condena, con la precisión que el apoderado de la contraparte tiene toda la potestad para hacer en su contestación de la demanda las aclaraciones y precisiones que contemple como necesarias sobre cada pretensión acorde a la realidad que rodeó cada hecho expuesto y que está bajo su conocimiento, siendo el juzgador de instancia el que en su debido momento analizará de manera integral todos los argumentos puestos a consideración, sin dejar de lado la interpretación armónica e integral de tales argumentos como lo hace con la demanda.

De modo que la posible inadecuada expresión de las ideas no puede ser motivo de repudiación del derecho cuando éste alcanza a percibirse en su intención y en la exposición de ideas del demandante, como en este caso ocurre, sin que se visualice que ello acarrea una violación al derecho de defensa de la contraparte, quien en igual sentido, a partir del contexto general del escrito de demanda, descubre su intención y a partir de allí su defensa puede llamarse a estar bien lograda.

Por tales razones esta excepción no tiene vocación de prosperidad y en ese orden, habrá de ser confirmada la decisión apelada, con imposición de

costas a cargo de Morelco S.A.S, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$300.000.

Ahora, Cenit S.A.S. expone dos puntos de disenso, el primero, atañe a la falta de competencia funcional que enrostra por estar bajo discusión la existencia de unos contratos que están alejados de lo que al Juez del Trabajo se le delimita conocer, por ser de naturaleza civil o comercial; y el segundo, está encaminado a derruir el argumento del juez que dio por demostrado el agotamiento de la reclamación administrativa como presupuesto procesal necesario para promover la acción judicial contra esa sociedad de carácter mixto.

Para resolver la primera de las cuestiones, se tiene que según la competencia general del rito laboral, esta jurisdicción ordinaria conoce entre otros de los conflictos emanados de la ejecución de obligaciones provenientes de la relación de trabajo -artículo 2° CPTSS-, evidenciando el escrito inicial que lo perseguido es el reconocimiento de conceptos derivados de la prestación de sus servicios en su calidad de trabajador o subordinado partiendo de las causas que dieron origen a su contratación, que pregona en los contratos que entre las sociedades que integran la pasiva se celebraron, lo que muestra que lo que está por definir no está en la línea de las consecuencias civiles o comerciales de esos contratos con sus adiciones, sino que al intervenir estos en manera alguna en la contratación laboral del actor, es necesario traerlos a colación en este trámite para definir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la actividad productiva alegada se ejecutó, y definir el aspecto de unidad de contrato que se incluye como uno de los pedimentos.

Por manera que, si bien es cierto que las pretensiones 1 y 2 no contienen una formulación técnica acertada, ya que no es dable al Juez del Trabajo inmiscuirse en tópicos que son ajenos a las relaciones de trabajo, bajo el mismo argumento previo de la intelección general del escrito demandatorio, no puede implicar ello el remitir el asunto a otra especialidad, porque es

sabido para todos los profesionales del derecho involucrados en esta acción judicial, que lo trascendental y lo que ocupa la atención no es la eventual relación dada entre las codemandadas, sino definir la relación jurídico sustancial que surgió entre el demandante y Morelco S.A.S en ejecución de los contratos que se aduce fueron celebrados con Ecopetrol S.A y Cenit S.A.S, por lo que admitida la demanda en esos términos, lo que es viable no es dar razón a la apelante en el sentido de enviar el expediente a la especialidad civil, pues ello se traduce en un sinsentido en el marco del propósito último de este proceso que encuadra absolutamente es en las competencias de la jurisdicción laboral, sino que se hace susceptible de ser saneada esa situación en las etapas que la diligencia del artículo 77 del CPTSS tiene destinadas para ese efecto, no teniendo cabida entonces este medio de oposición que se declarará no probado.

Sobre el segundo asunto discutido, debe analizarse si en esta oportunidad puede colegirse satisfecho o no el requisito a que alude el artículo 6º del Código Adjetivo Laboral, disposición que señala:

*“Artículo 6º. Reclamación administrativa. Las acciones contenciosas contra La Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública, sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta...”*

El sentido de la norma es claro. La parte demandada, cuando es una de las mencionadas, sólo puede ser parte en una controversia judicial, cuando previamente se le ha formulado la reclamación administrativa, es decir, se le ha solicitado lo que se pretende en el proceso que se promueve. Esto con el exclusivo fin de que tenga oportunidad de pronunciarse previamente sobre el derecho pretendido por el interesado, ya sea reconociéndolo o negándolo. Por ello, bien ha dicho la jurisprudencia laboral, la reclamación administrativa es un factor de competencia de ineludible cumplimiento (al respecto ver la sentencia de la Corte Constitucional C-792 de 2006).



Con base en tal precisión, se retoma el caso, encontrando que al estar indiscutida la naturaleza jurídica mixta de Cenit S.A.S. del orden nacional adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que valga decir, de acuerdo con el artículo 38 y el párrafo primero del artículo 68 de la Ley 489 de 1998, están vinculadas a la rama ejecutiva como ente descentralizado por servicios, por lo que conservan su calidad de entidad estatal pese a que tiene capital privado, se verificó con detalle el expediente en el aparte de los anexos de la demanda que lo integra 1553 folios, sin encontrar escrito alguno dirigido a esa sociedad en el cual se procediera con la súplica de cancelación de adeudos insolutos en virtud de la ejecución de contratos que fueron cubiertos en beneficio de la sociedad; sin embargo, no lo mismo ocurrió respecto de Ecopetrol S.A, donde se radicó petición para obtener el pago de una indemnización por despido, horas extras, viáticos, prestaciones sociales legales y convencionales, reliquidación de salarios por factor salarial y la indemnización moratoria, cuya respuesta se emitió el 30 de septiembre de 2019 (Págs. 299 y 300 Archivo 02), informándose que se había dispuesto su remisión a Cenit S.A.S por estar el contrato de Morelco S.A.S a cargo de esa firma, para lo que Ecopetrol expidió dos constancias del traslado de la comunicación que contienen sello de radicación que data del 27 de septiembre de 2019 en la manera como se observa en la imagen que se inserta a continuación, donde registra una con destino a Camilo Alfredo Vergara, quien según ese mismo oficio era el ingeniero que ostentaba la calidad de Director General de Obra de Morelco S.A.S (Pág. 301 Archivo 02), y otra, dirigida a Jorge Eduardo Evans Rojas como administrador de contrato de Cenit S.A.S., a partir de lo cual el Juzgado dio por satisfecho este requisito de procedibilidad.



Empero, para esta Sala aun con ese traslado de la comunicación, no es posible dar por sentado que en efecto haya arribado a la dependencia de Morelco S.A.S, pues ningún vestigio lo demuestra por solo contarse con la prueba de la radicación para ser enviado al destino, con lo cual no puede entenderse sin lugar a dudas que los conceptos que hoy integran el *petitum* hubieran sido de conocimiento previo de parte de Cenit S.A.S., porque si bien otras solicitudes fueron resueltas bajo igual mecanismo empleado por Ecopetrol (Págs. 326-355 y 1459-1463 Archivo 02), al alegarse por esa convocada no haber recibido algún requerimiento anterior a la demanda, debía contarse con un medio demostrativo más fehaciente que al ser ausente, no se cumple la exigencia que otorgaba la posibilidad a la entidad estatal de pronunciarse antes de impulsarse en su contra un proceso judicial, lo que de contera implica que el requisito de la reclamación administrativa contenido en el artículo 6° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social no se ha cumplido por parte del demandante y, en consecuencia, se está ante una situación que resulta insalvable para la continuación del trámite del proceso respecto de esta sociedad.

Tal circunstancia impone la revocatoria de la decisión en este sentido, para en su lugar declarar probada la excepción de falta de agotamiento de reclamación administrativa lo que da paso a ordenar la terminación del proceso respecto de Cenit S.A.S, debiendo continuarse solo frente Morelco S.A.S y Ecopetrol S.A.

En esta instancia acorde a lo estipulado en el artículo 365-3 del CGP, las costas procesales estarán a cargo de Morelco S.A.S, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$300.000.

### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, **REVOCA parcialmente** el auto materia de apelación en tanto declaró no probada la excepción previa de “falta de agotamiento de reclamación administrativa” para en su lugar declarar su prosperidad respecto de Cenit S.A.S., ordenando la terminación del proceso respecto de esta y su continuación solo frente a Morelco S.A.S y Ecopetrol S.A. **CONFIRMA** en lo demás. Las costas en esta instancia estarán a cargo de Morelco S.A.S, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$300.000.

La presente decisión se notifica en los ESTADOS ELECTRÓNICOS.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Se certifica: Que la decisión anterior fue notificada por ESTADOS N° 13 fijados el 30 de enero de 2023 en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario.